



**Asamblea General  
Consejo de Seguridad**

Distr.  
GENERAL

A/45/207<sup>4</sup>

S/21238

9 de abril de 1990

ESPAÑOL

ORIGINAL: INGLÉS

**ASAMBLEA GENERAL**

Cuadragésimo quinto período de sesiones  
Temas 12, 92, 102, 103, 112, 113 y 142 de  
la lista preliminar\*

INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL  
APLICACION EFECTIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE  
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS  
HUMANOS Y FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS  
ORGANOS ESTABLECIDOS DE CONFORMIDAD CON  
ESOS INSTRUMENTOS

CUESTION DEL ENVEJECIMIENTO

PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL

LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,  
INHUMANOS O DEGRADANTES

FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA DEL PRINCIPIO  
DE LA CELEBRACION DE ELECCIONES AUTENTICAS  
Y PERIODICAS

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA BUENA  
VECINDAD ENTRE ESTADOS

**CONSEJO DE SEGURIDAD**

Cuadragésimo quinto año

Carta de fecha 9 de abril de 1990 dirigida al Secretario General  
por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de  
Israel ante las Naciones Unidas

He recibido instrucciones de mi Gobierno de señalar a su atención los extractos adjuntos de Country Reports on Human Rights Practices For 1989 (Informes por países sobre las prácticas en materia de derechos humanos para 1989), publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en el que figura información sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria. He subrayado los pasajes especialmente pertinentes (véase el anexo).

\* A/45/50.

A/45/207  
S/21238  
Español  
Página 2

Habida cuenta de la importancia de esa información, tengo el honor de solicitar que el texto de la presente carta y su anexo se publiquen como documento oficial de la Asamblea General, en relación con los temas 12, 92, 102, 103, 112, 113 y 142 de la lista preliminar, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Johanan BEIN  
Embajador  
Representante Permanente interino

**Anexo\***

101° Congreso }  
Segundo período }  
de sesiones }

PUBLICACION DE COMITES CONJUNTOS

**INFORMES POR PAISES SOBRE LAS PRACTICAS EN MATERIA DE  
DERECHOS HUMANOS PARA 1989**

**INFORME PRESENTADO AL**

**COMITE DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES  
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**Y AL**

**COMITE DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**POR EL**

**DEPARTAMENTO DE ESTADO**

**DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 116 d) y 502B b) DE LA  
LEY DE AYUDA EXTERIOR DE 1961, EN SU FORMA ENMENDADA**

**FEBRERO DE 1990**

**Publicación para uso de los Comités de Asuntos Exteriores y de Relaciones  
Exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado, respectivamente**

**EDITORIAL DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

24-900

Washington: 1990

Publicación para la venta, Superintendente de la Oficina de Ventas de  
Documentos del Congreso, Editorial del Gobierno de los Estados Unidos  
de América, Washington, D.C. 20402

\* El subrayado fue agregado por el Encargado de Negocios interino de la  
Misión Permanente de Israel ante las Naciones Unidas.

## SIRIA

Siria está gobernada por un régimen autoritario que no vacila en recurrir a la fuerza cuando se ve amenazado. El Presidente ejerce un poder casi absoluto. Junto con sus principales asesores, el Presidente adopta las decisiones fundamentales sobre la política extranjera, la seguridad nacional y la economía, y estas decisiones con frecuencia reciben la ratificación del Parlamento. El Parlamento se constituye por elecciones ordinarias, pero no ejerce una autoridad independiente. Los tres poderes del Gobierno están sumamente influenciados por las posiciones del Partido Ba'ath, cuya situación preponderante en el Estado deriva de la Constitución. La oposición política independiente no autorizada es objeto de una violenta represión. Sin embargo los consejos administrativos locales ejercen cierta autonomía regional.

El Partido oficial Ba'ath, que preconiza el socialismo y el arabismo secular, ganó ascendiente en 1963. Está compuesto principalmente por miembros de las fuerzas armadas, que consumen gran parte de los escasos recursos económicos de Siria. En los últimos años el Partido ha servido principalmente para legitimar el régimen del Presidente Asad. Aunque la doctrina del Partido Ba'ath procura superar el sectarismo y la conciencia de clase, creando un sentimiento de identidad nacional más que étnica, la fidelidad a la etnia, la religión y la región sigue siendo importante. Los miembros de la secta de los alawi, a la que pertenece el Presidente Asad, ocupan la mayoría de los altos cargos en las fuerzas armadas y de seguridad.

Con excepción del paréntesis entre 1973 y 1974, Siria ha estado sujeta a un régimen de poderes excepcionales desde 1963. El Gobierno ha justificado la ley marcial invocando el estado de guerra con Israel y la amenaza constante de los grupos terroristas (fundamentalistas islámicos, iraquíes y libaneses). Hasta 1982 los Hermanos Musulmanes representaron la amenaza interna más grave para el régimen. Este grupo de fundamentalistas musulmanes sunitas desafió abiertamente al Gobierno secular del Partido Ba'ath, dominado por los alawi, desde principios del decenio de 1970 hasta 1982, año en que el grupo fue brutalmente suprimido. La Liga de Acción Comunista es otro grupo de oposición clandestino. Sin embargo, la manifestación pública de las actividades contra el régimen sigue siendo muy limitada y no se han denunciado detenciones en gran escala en 1989.

El Gobierno Central mantiene un vasto dispositivo de seguridad. Las diversas secciones principales de los servicios de seguridad trabajan de forma independiente y al margen del sistema jurídico ordinario; se sospecha que todas cometen violaciones de los derechos humanos. El régimen justifica las actividades de los servicios de seguridad invocando la persistencia del estado de emergencia declarado con motivo de la guerra con Israel.

Siria tiene una economía socialista de Estado y ha nacionalizado la mayoría de las principales empresas. El régimen ha aplicado políticas económicas dirigidas a corregir las desigualdades regionales y de clases antes imperantes. El sector privado, reducido pero vigoroso, está en expansión, y la mayor parte de las tierras agrícolas pertenecen a particulares. La economía sufre los efectos del estancamiento, y el crecimiento real ha sido esencialmente insignificante, siendo el producto interno bruto de 1988 prácticamente equivalente al de 1982.

En 1989 la situación general de los derechos humanos acusó pocos cambios. Siria respondió por primera vez a una indagación de las Naciones Unidas sobre sus prácticas en materia de derechos humanos, y la prensa del país informó sobre la visita de una delegación de Amnistía Internacional que se reunió en junio con el Vicepresidente Khaddam. El Gobierno también respondió positivamente a pedidos de información concretos procedentes del Gobierno de los Estados Unidos sobre la condición de los judíos sirios. Sin embargo, Siria sigue efectivamente gobernada por un régimen autoritario, y no hay indicios de progreso hacia un sistema político más libre o un mayor respeto de los derechos humanos de los individuos. Los abusos contra los derechos humanos, entre los que figuran la tortura, la denegación de la libertad de expresión, de prensa, de asociación y del derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno siguieron siendo una característica del régimen en 1989.

#### EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona y del derecho a no ser objeto de las siguientes violaciones

a) Ejecuciones políticas y otras ejecuciones extrajudiciales

Las ejecuciones por motivos políticos en Siria son una reacción típica frente a la subversión o las amenazas directas y violentas contra el régimen. No se denunciaron en 1989 ejecuciones por motivos políticos, pero Amnistía Internacional comunicó en 1988 por lo menos dos muertes causadas por malos tratos infligidos durante el arresto.

b) Desapariciones

Se han recibido en el pasado denuncias dignas de crédito sobre la desaparición de algunos sirios detenidos por motivos de seguridad. Sin embargo, no hubo ninguna denuncia de este tipo en 1989.

c) Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Aunque el código penal prohíbe y castiga severamente, la tortura, siguen siendo numerosas las denuncias de torturas, principalmente durante la detención y el interrogatorio en las causas de tipo político o vinculadas con la seguridad.

En su informe de 1989 correspondiente al año 1988, Amnistía Internacional observó que se seguían recibiendo muchas denuncias de torturas y malos tratos, aparentemente sistemáticos de presos, entre los que figuraban menores. Cita casos de presos que habrían sido golpeados - en algunas oportunidades, causando lesiones graves - y de uno que habría recibido descargas eléctricas. En el informe se hace observar que tres de los 10 miembros de la comunidad judía detenidos desde 1987 acusados de viaje ilegal habrían sido torturados en la cárcel. Las fuerzas de seguridad con frecuencia detienen a familiares de un fugitivo, y los mantienen bajo arresto o los torturan hasta que el prófugo se rinda a las autoridades. En 1989 se recibió por lo menos un informe sobre el procesamiento de oficiales que ese año habían recurrido a tales prácticas, pero no hay indicios de que el Gobierno haya adoptado medidas concertadas para hacerlas cesar.

Ningún grupo internacional puede penetrar en las instalaciones penitenciarias de seguridad. Los familiares no suelen estar autorizados a visitar los establecimientos penitenciarios.

d) Detención, prisión o destierro arbitrario

El código civil, que sigue las pautas del derecho francés, contiene en general disposiciones sobre el debido proceso, pero prácticamente carece de normas para los delitos políticos o contra la seguridad. En virtud de las disposiciones que rigen el estado de emergencia pueden suspenderse las garantías ordinarias, especialmente en los casos de tipo político y vinculados con la seguridad, y es posible mantener bajo arresto a una persona por tiempo indeterminado, sin formular cargos en su contra ni someterla a juicio; puede ser detenida en secreto, sin ninguna restricción jurídica y se le puede negar el derecho de que un juez se pronuncie sobre el fundamento de su detención preventiva. El acusado no tiene ningún recurso contra una detención ilegal y no puede ponerse en contacto con sus familiares o amigos, que en general desconocen su paradero. Se estima que muchas personas "desaparecidas" están vivas y detenidas por las fuerzas de seguridad. Con frecuencia los detenidos recobran su libertad sin que nunca se les formulen cargos. No hay estimaciones fehacientes sobre el número de personas detenidas sin juicio. El destierro, a veces voluntario, se utiliza ocasionalmente para desembarazar al régimen de elementos molestos.

Con respecto a los trabajos forzados u obligatorios, véase la sección 6 c).

e) Denegación de un juicio público imparcial

El sistema judicial sirio, basado en la legislación francesa, está integrado por tribunales civiles separados (alquileres, contratos, etc.); tribunales penales o criminales, con competencia para delitos económicos; tribunales religiosos; tribunales militares, tribunales de seguridad y tribunales constitucionales.

Los casos civiles y penales están sujetos a la jurisdicción del Ministerio de Justicia. En virtud de la acusación del Ministerio Público el presunto autor de un hecho penal es detenido provisionalmente y luego enviado al juez para que éste se pronuncie. El juez puede ordenar la libertad del reo por falta de suficientes pruebas o remitir el caso a un tribunal penal. Los acusados tienen derecho a designar un representante legal; si no pueden sufragar los costos de un abogado, el tribunal les nombrará uno de oficio. Los tribunales civiles y penales no ponen obstáculos a la actuación de los abogados en defensa de sus clientes y les conceden el derecho de interponer recursos. También estipulan una fianza, en general por una suma moderada. En los casos penales no controvertidos los tribunales suelen estar exentos de presiones oficiales, aunque el Gobierno podría ejercerlas si así lo deseara. El sistema judicial, lento y engorroso, puede dejar a sospechosos consumiéndose en la cárcel durante meses.

Los acusados de una infracción penal se presumen inocentes, a no ser que se pruebe su culpabilidad. Pueden presentar pruebas y pedir careos con sus acusadores. Los juicios son públicos, salvo cuando hay menores y los delitos pueden ofender la sensibilidad moral, como en el caso de la violación. Las causas se someten a un magistrado; no existe el sistema de jurados.

En 1989 hubo menos denuncias de detenciones por delitos "económicos". En cambio, muchos de los detenidos anteriormente por violaciones a la reglamentación sobre divisas fueron puestos en libertad, y las medidas de liberalización económica han permitido a los empresarios privados trabajar más fácilmente sin recurrir a los mercados no autorizados de divisas, aunque técnicamente un particular sirio todavía no puede poseerlas legalmente, a menos que procedan de exportaciones privadas.

Las personas acusadas de delitos políticos o contra la seguridad están sujetas a la competencia del Tribunal de Seguridad del Estado. Los reos no intervienen en la elección de su defensor, que es designado por el tribunal. Todas las audiencias del tribunal son privadas y no existen cauces oficiales para obtener información sobre el juicio o la condena, aunque los familiares con influencia en el Gobierno puedan en última instancia obtener información, e incluso la liberación del acusado.

Existe además el Tribunal Superior, dependiente del Primer Ministro, que examina las cuestiones vinculadas con la legalidad de los contratos del sector público y otras cuestiones entre el Gobierno y el sector privado.

El Gobierno no facilita informaciones sobre el número de personas detenidas por delitos políticos o contra la seguridad, pero ese número es probablemente elevado, pues algunas detenciones se remontan a 1970. Según informaciones no confirmadas, entre febrero y mayo de 1988 habrían sido detenidos hasta 1.200 ciudadanos vinculados con los Hermanos Musulmanes o la Liga de Acción Comunista. No hubo denuncias de detenciones por motivos políticos en 1989.

- f) Injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia

Los servicios de información nacionales mantienen una red de guardias que protegen los edificios oficiales e importantes, y vigilan la actividad de los residentes en esos vecindarios. Puede afirmarse casi con certeza que se graban algunas conversaciones telefónicas. La presencia de oficiales de policía y de seguridad está muy extendida, especialmente en Damasco.

El sistema postal somete la correspondencia, incluidas las publicaciones extranjeras, a una censura selectiva. Aunque el ordenamiento jurídico establece garantías, y entre ellas la necesidad de una orden de detención o de allanamiento para que los policías puedan penetrar en hogares privados, las reglamentaciones dictadas en virtud del estado de emergencia suspenden estas garantías en los casos vinculados con la seguridad.

Pueden establecerse puestos de control en cualquier parte, sin necesidad de órdenes de registro o de detención. Las fuerzas de seguridad se interesan sobre todo en los presuntos subversivos, aunque también buscan contrabando de mercaderías. Los informes sobre puestos de control establecidos en 1989 fueron pocos, salvo en la frontera con el Líbano.

## Sección 2. El respeto de los siguientes derechos civiles

### a) Libertad de expresión y de prensa

No se permite la crítica pública del Presidente, y las opiniones adversas al Gobierno y al Partido Ba'ath se enfrentan con una política disuasiva eficaz. Las autoridades o el Partido Ba'ath son propietarios y explotadores exclusivos de todos los medios de comunicación y editoriales, y supervisan rigurosamente la difusión de toda la información.

La censura de las noticias extranjeras y nacionales se ejerce por conducto de las oficinas de los Ministerios de Información y de Cultura y Orientación Nacional. Todo tema juzgado delicado para los intereses del Gobierno no aparece en la prensa ni en las emisiones cotidianas. En 1989 fueron objeto de censura algunas decisiones de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y los disturbios civiles ocurridos en la Unión Soviética, Europa oriental y China, antes de que la agencia de prensa soviética TASS comunicara estas informaciones. Sin embargo, las emisiones de radio y televisión de los países vecinos, y entre ellos Israel, se reciben sin ninguna interferencia y en general las informaciones no transmitidas por los medios de comunicación sirios llegan a conocimiento de todos.

Los diarios no dejan espacio para la oposición política. Las críticas a las políticas o actividades gubernamentales se limitan a cuestiones económicas, deficiencias administrativas menores y casos de corrupción interna, e incluso suelen estar organizadas desde la cúspide. Con todo, casi todos los días aparecen críticas sobre problemas económicos. Los oficiales de rango superior son raramente criticados.

El material impreso y las películas importadas están sujetos a censura. A veces los artículos desfavorables a Siria o su intervención en el Líbano se suprimen íntegramente de las revistas y publicaciones extranjeras antes de su distribución. Las obras literarias, tanto de ficción como de otro tipo pueden ser censuradas por la Unión de Escritores Árabes si se las considera excesivamente críticas para Siria, agravantes para alguno de los grupos religiosos sirios o demasiado gráfica al tratar temas vinculados con el sexo. La censura de las películas es frecuente por razones diversas como una interpretación desfavorable del conflicto del Oriente Medio, la acusación de sectarismo, o la participación de actores o sociedades de producción víctimas del boicót árabe. La vigilancia es mucho más rigurosa cuando los materiales están en árabe.

Las escuelas de todos los niveles dependen del Gobierno. Los establecimientos primarios y secundarios de carácter privado administrados por grupos religiosos minoritarios deben seguir el plan de estudios del Ministerio de Educación y están sujetos a inspecciones periódicas. En la escuela, una hora por día se dedica a inculcar el patriotismo sirio. Los docentes no están autorizados a manifestar ideas contrarias a la política gubernamental, aunque en el ciclo universitario se tolera una mayor libertad de expresión.



b) Libertad de reunión pacífica y de asociación

Las reuniones, asambleas o manifestaciones públicas sólo pueden celebrarse con autorización oficial, y generalmente por iniciativa del Gobierno o del Partido Ba'ath. Las asociaciones privadas, incluidas las agrupaciones religiosas, pueden reunirse si han recibido el permiso gubernamental para su constitución. Aunque este permiso suele otorgarse, sólo se autorizan las actividades no políticas.

Para un análisis de la libertad de asociación aplicada a los sindicatos, remítase a la sección 6 a).

c) Libertad de religión

Aunque casi dos terceras partes de los sirios son musulmanes sunitas, la Constitución no establece una religión de Estado. Como concesión a los fundamentalistas islámicos, que objetan el carácter secular de los ba'athi, la Constitución de 1973 exige que el Presidente sea musulmán. Por lo demás, oficialmente ninguna religión tiene preferencia sobre otra, y el Gobierno observa solemnemente todas las principales fiestas cristianas y musulmanas. Muchos cargos importantes del Gobierno están ocupados por miembros de la secta minoritaria de los alawi (que representan por lo menos entre el 10% y el 12% de la población), considerada herética por muchos sunitas musulmanes.

La ideología secular de los ba'athi y las influencias modernizadoras han conseguido atenuar un poco la supremacía de los factores religiosos y étnicos pero los sirios siguen identificándose con sus asociaciones comunales.

Con pocas excepciones (indicadas *infra*), todos los grupos religiosos, musulmanes y no musulmanes, y entre ellos los 3.800 judíos de Siria, tienen la libertad de practicar sus diversas religiones. Sin embargo, las colectas de fondos, la construcción y la celebración de toda reunión que no sea para el culto están severamente restringidas, y a veces prohibidas. La instrucción religiosa se permite dentro del plan de estudio para judíos y cristianos en las escuelas judías y armenias, entre otras. Los grupos no musulmanes pueden mantener vínculos con musulmanes y correligionarios residentes fuera de Siria.

Una excepción a la política oficial de tolerancia religiosa es el trato reservado a los Testigos de Jehová y a los Adventistas del Séptimo Día, que no pueden practicar su religión ni poseer bienes eclesiásticos.

Los misioneros extranjeros están autorizados a predicar y practicar. La publicación de material religioso está sujeta a la misma supervisión rigurosa que el material secular.

d) Libertad de circulación dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación

Los viajes dentro del país están restringidos únicamente en la zona de seguridad de las Alturas de Golán y cerca de las fronteras con el Líbano, Jordania e Iraq. Todos los ciudadanos que deseen viajar al extranjero deben obtener

pasaportes y visados de salida. Teóricamente los sirios pueden viajar a los demás países árabes, salvo el Iraq, con su documento de identidad, aunque en la práctica esto se aplica únicamente al Líbano. Las mujeres sirias mayores de 18 años pueden viajar sin autorización de un familiar masculino. Sin embargo, el marido puede presentar una solicitud al Ministerio del Interior para impedir que su esposa salga de Siria.

En general, el régimen prohíbe viajar al extranjero a las personas sujetas a la obligación de servicio militar y a determinadas categorías de profesionales, como farmacéuticos, arquitectos e ingenieros, formados a costa del Estado y que no hayan trabajado durante cinco años para el Gobierno. Sin embargo, en circunstancias excepcionales las personas de estas categorías pueden obtener pasaportes válidos por tres meses y para viajar sólo a determinados países. Los estudiantes que viajen al extranjero para seguir estudios superiores deben obtener autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y, como los demás sirios, están obligados a regresar cuando el Gobierno los llame. Las personas sorprendidas tratando de viajar ilegalmente son castigadas con multas y penas de arresto.

Los palestinos residentes en Siria deben obtener asimismo un visado de salida de las autoridades sirias. Los palestinos jóvenes a veces tienen dificultades para obtener el documento de viaje indispensable.

Los judíos, particularmente los que tienen propiedades y vínculos financieros importantes en Siria, pueden viajar al extranjero con un poco más de facilidad desde mediados del decenio de 1970. Salvo excepciones, el Gobierno sigue aplicando su política de no emitir pasaportes y visados de salida a todos los miembros de una familia judía al mismo tiempo. En teoría, puede exigirse a todos los sirios que depositen una fianza por una suma de 300 a 1.000 dólares, que será confiscada si no regresan. En realidad, la constitución de esta fianza sólo se exige sistemáticamente a los judíos. Si bien en general se desaprueba la emigración de judíos, el Gobierno sirio ha manifestado una actitud favorable en los casos de reunificación familiar y de judías solteras que no pueden encontrar un marido adecuado en la pequeña comunidad judía de Siria. El número de judías solteras autorizadas a emigrar aumentó espectacularmente a mediados de 1989, tras las deliberaciones entre los Estados Unidos y Siria sobre el tema. Todo ciudadano sirio sorprendido tratando de emigrar o viajar al extranjero sin autorización o sospechoso de haber visitado Israel ilegalmente puede ser detenido y procesado. A fines de 1987 y en 1988 diez judíos fueron detenidos por violar la reglamentación de viajes y condenados a penas de prisión, hasta dos años. Según los informes tres habrían sido torturados. Tres siguen en la cárcel. No se han registrado nuevas detenciones en 1989.

Sección 3. Respeto de los Derechos Políticos: Derecho de los ciudadanos a cambiar su Gobierno

Los sirios no pueden cambiar su gobierno legal y pacíficamente. El Presidente Asad y sus asesores superiores controlan eficazmente la política exterior, las decisiones relativas a la seguridad nacional y las decisiones económicas y sociales más importantes. Si bien la Constitución dispone que el pueblo participe en las

elecciones presidenciales, que se celebran cada siete años, los sirios tienen poca voz en la determinación de sus dirigentes políticos. Los decretos presidenciales, que se emiten cuando el Parlamento no está en sesión, tienen fuerza de ley y generalmente se refieren a cuestiones internas fundamentales, como el aumento de los salarios del sector público y los precios de los productos esenciales. El Presidente Asad ganó la presidencia por tercera vez en 1985 cuando, según fuentes oficiales, el 99% de la población votó y el 99% de los que votaron eligieron a Asad, que se presentó sin oposición. Se permite cierto grado de autonomía regional, siempre que no desacate la autoridad del Gobierno central. Por ejemplo, los principales centros civiles ejercen control administrativo local. Ciertos grupos étnicos y sociales, como los beduinos y los pueblos que viven en aldeas, tienen poco contacto con el Gobierno central.

Sección 4. Actitud del Gobierno respecto de la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos

El Gobierno rechaza las acusaciones de haber violado los derechos humanos, desconociéndolas o tildándolas de injerencia en sus asuntos internos. Sin embargo, el Gobierno respondió a una investigación de las prácticas sirias realizada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1988, sobre la base de una denuncia de Amnistía Internacional. Finalmente, la Comisión desechó el caso. Funcionarios de Amnistía Internacional visitaron Siria en junio de 1989 con el fin de asistir a la convención de abogados árabes, durante la cual celebraron reuniones privadas con el Vicepresidente Khaddam. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha tenido escasos contactos con los presos. Ningún sirio está dispuesto a criticar públicamente al Gobierno por su política de derechos humanos.

En su informe correspondiente a 1988, Amnistía Internacional observó que durante todo el año había continuado expresando su preocupación al Gobierno sobre informes de detenciones arbitrarias, arrestos sin entablar juicio a sospechosos políticos, torturas y malos tratos de detenidos, así como la imposición de la pena de muerte, aunque el Gobierno no había respondido. Indicó que el Gobierno sí reaccionó a una declaración oral que formuló Amnistía Internacional en febrero de 1988, en que señaló a la atención de la Comisión de Derechos Humanos informes que indicaban que las fuerzas de seguridad torturaban en forma generalizada y sistemática y que detenidos políticos habían muerto mientras estaban en custodia; el Gobierno respondió expresando "pesar" ante la "declaración exagerada" y la "actitud parcial" adoptada por Amnistía Internacional. Esta organización también señaló que en abril de 1988 había notificado sus preocupaciones a las Naciones Unidas y había enviado una copia de sus comunicaciones al Gobierno de Siria, invitándolo a que contestara, pero no se había recibido respuesta alguna.

El Gobierno con frecuencia critica a otros países, incluidos Israel, Irak y Sudáfrica, por razones relacionadas con los derechos humanos, en las Naciones Unidas y en otros órganos internacionales.

Sección 5. Discriminación sobre la base de la raza, el sexo, la religión, el idioma o la clase social

Para prosperar en Siria es importante pertenecer al Partido Ba'ath o ser familiar directo de un miembro prominente. Las relaciones en el Partido pueden allanar el camino para entrar en las mejores escuelas primarias y secundarias, lograr acceso a empleos más lucrativos y tener mayor poder en el Gobierno. La religión también contribuye. Con frecuencia los miembros de la secta alawi tienen mejores trabajos. Se prohíbe que los judíos se alistén en las fuerzas armadas.

El estado de guerra oficial con Israel continúa afectando la condición de los judíos sirios, si bien la situación de la comunidad ha mejorado en los últimos años. Hoy en día, la comunidad judía disfruta de un nivel de vida relativamente alto, tiene acceso a mejor educación y a la vida profesional. Sin embargo, los judíos están sujetos a ciertas restricciones para viajar al extranjero (véase la sección 4 d)) y son la única minoría cuyos pasaportes y documentos de identidad consignan su religión. Los judíos, como los demás ciudadanos de Siria, están bajo la atenta vigilancia de los servicios de inteligencia. Como todos los demás sirios, los judíos sirios tienen prohibido el contacto con los israelíes. Los judíos no ocupan puestos en el Gobierno salvo posiciones de escasa categoría, como oficinistas y maestros.

La comunidad palestina de Siria asciende aproximadamente a 250.000 anotados en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas y se compone sobre todo de refugiados de las guerras árabe-israelíes de 1948 y 1967. Varios miles de libaneses y palestinos también escaparon a Siria en 1982, tras la invasión israelí del Líbano. Los palestinos son oficialmente considerados residentes transitorios a la espera de la resolución del conflicto árabe-israelí.

Según la ley siria, los palestinos residentes tienen igual acceso al empleo, a los servicios sociales y a la educación. Además, las organizaciones palestinas sancionadas por el Gobierno controlan las instituciones sociales dentro de su comunidad. Los palestinos pueden elegir su lugar de residencia y ocupación, y la mayoría participa plenamente en la economía local. Con el permiso del Gobierno, pueden ser propietarios de más de un edificio o terreno.

El Gobierno permite que funcionen grupos políticos palestinos que abrazan la posición oficialmente sancionada contra las políticas de Yasser Arafat, aunque sus actividades se circunscriben cuidadosamente. Los palestinos no pueden votar en las elecciones sirias ni hacerse ciudadanos sirios, salvo las mujeres que contraigan matrimonio con un ciudadano sirio. Si bien actualmente ocupan varios puestos superiores en la burocracia, extraoficialmente los palestinos tienen prohibido el acceso a las escalas superiores del Gobierno.

La Constitución garantiza la igualdad de derechos a la mujer e insta a que se eliminen todos los obstáculos para su desarrollo. Históricamente, la mujer siria se ha beneficiado de las políticas del Gobierno, incluido el pago de igual remuneración por trabajo de igual valor.

La mujer siria se desempeña activamente tanto en el sector público como en el privado. Según estadísticas oficiales, el 43% de las mujeres sabe leer y escribir, en comparación con el promedio nacional del 49%. El Gobierno alienta la matrícula de la mujer en todos los niveles de enseñanza y un gran número de mujeres asiste a la universidad. Las leyes prevén la licencia por maternidad con goce de sueldo hasta tres meses y medio, y velan por que la mujer regrese posteriormente a su trabajo. Además, todos los establecimientos de más de 100 empleados deben ofrecer servicios de atención infantil. El Sindicato Nacional de Mujeres, fundado en 1967, trata muchas de las cuestiones con que tropieza la mujer y procura proteger los derechos ganados y fortalecer la posición de la mujer. Actualmente estudia una propuesta legislativa que prorrogaría a la edad de 15 ó 16 años la custodia materna de los hijos en casos de divorcio (en lugar de la edad actual de 9 años para los niños y 11 para las niñas) y realiza esfuerzos enérgicos por erradicar el analfabetismo de las adultas.

En el plano personal, la tradición de que las mujeres están bajo la custodia de los hombres sigue contraponiéndose a las políticas oficiales. Sobre todo entre los musulmanes, dicha tradición suele limitar los derechos de la mujer en lo que respecta al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia y las decisiones personales.

Se sabe que existen mujeres que sufren castigos físicos, pero los hábitos sociales conservadores de la sociedad siria no permiten que se hable del tema en público, lo que hace difícil estimar la magnitud del problema. Por lo que se sabe, el Gobierno no elabora estadísticas oficiales sobre los castigos domésticos. En el sistema jurídico sirio, la mujer tiene derecho, recurriendo a los tribunales, a corregir cualquier agravio que se le haya causado por actos violentos, pero en general no se entablan juicios por castigos físicos dado el estigma social que se adscribe a los procedimientos legales en tales casos.

#### Sección 6. Derechos del trabajador

##### a) Derecho de asociación

El Gobierno utiliza la Federación General de Sindicatos de Trabajadores de Siria (FGST) como marco para controlar prácticamente todos los aspectos de la actividad sindical. Los trabajadores no pueden constituir sindicatos independientes de la estructura establecida por el Gobierno. Los sindicatos son el cauce de transmisión de instrucciones e información de los dirigentes sirios a la mano de obra, pero hay indicios de que los dirigentes sindicales elegidos, como miembros del Partido Ba'ath, canalizan también hacia los dirigentes la insatisfacción de los trabajadores. La ley establece que al menos el 51% de los miembros elegidos del Parlamento deben ser trabajadores o campesinos. Aunque la huelga no está prohibida en la legislación siria (excepto en el sector agrícola), existen en la práctica medios de disuasión eficaces. No se informó de ninguna huelga en 1989.

La FGST está afiliada a la Confederación Internacional de Sindicatos Arabes y a la Federación Sindical Mundial, de ideología comunista.

En la Constitución de 1973 se reconoce el derecho a constituir sindicatos. Los sindicatos de trabajadores sirios están organizados por sectores y a nivel local, provincial y nacional. De acuerdo con la legislación laboral siria, cualquier grupo de 50 o más trabajadores de una profesión o sector determinado pueden constituir un comité gremial. Estos comités locales pueden agruparse para formar un sindicato provincial. Los sindicatos provinciales pueden, a su vez, unirse con otros de la misma profesión para constituir una asociación o sindicato nacional. Las autoridades sindicales de todas las categorías son elegidas por votación secreta, y, según la información facilitada, los sindicatos provinciales son económicamente independientes del sindicato nacional.

Sin embargo, la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha observado que sólo puede constituirse un único sindicato para cada profesión dentro de cada provincia; los sindicatos de una provincia sólo pueden agruparse en una federación provincial de trabajadores, y ésta unirse con otras en la FGST. La Comisión ha observado también que la FGST tiene facultades exclusivas para determinar qué sindicatos pueden constituirse y tiene derecho a disolver el órgano director de cualquier sindicato. Asimismo, los sindicatos tienen la obligación jurídica de asignar un porcentaje determinado de sus ingresos a los órganos sindicales superiores y el Gobierno disfruta de amplias facultades de intervención en las finanzas sindicales.

Según la información facilitada por el Gobierno, existen en Siria 198 sindicatos nacionales agrupados en la estructura de la FGST y 9 sindicatos profesionales. El Gobierno sostiene que, aunque no es ilegal crear otros sindicatos, los sindicatos pertenecientes a la FGST han decidido voluntariamente no hacerlo porque consideran que con ello defienden de manera más eficaz los intereses de los trabajadores. Los dirigentes de la FGST señalan asimismo que los sindicatos sirios empezaron a desarrollarse durante el decenio de 1920 y que la FGST se creó en el decenio de 1930, mucho antes de la creación del Partido Socialista Árabe Ba'ath o del Gobierno de Asad, de forma que la legislación siria en la que se establece el sistema de unicidad sindical se limita a consagrar una práctica ya existente que refleja la voluntad de los trabajadores sirios. La labor asignada a la FGST consiste en facilitar su opinión sobre distintos aspectos de la legislación, definir normas aplicables a los trabajadores y a los métodos de trabajo y organizar la sindicación de la mano de obra. El Presidente electo de la FGST es un alto cargo del Partido Ba'ath en el poder y un miembro del Comando Regional y, junto con su ayudante, participa en todas las sesiones del Consejo de Ministros. Los secretarios generales de las nueve asociaciones no afiliadas a la FGST, algunos de los cuales no son miembros del Partido Ba'ath, son también funcionarios elegidos para estos cargos.

En las conclusiones de sus informes de 1987 y 1988, la Comisión de Expertos señaló que la estructura de la FGST equivale a un sistema jurídicamente establecido de unicidad sindical. La Comisión formuló asimismo diversas observaciones relativas a las restricciones al derecho de los trabajadores extranjeros a asociarse o constituir sindicatos de su propia elección, la interferencia de las autoridades públicas en la administración de los sindicatos y la prohibición de la huelga en el sector agrícola. En su informe de 1989, la Comisión de Expertos volvió a plantear estas cuestiones, señalando que el Gobierno sirio había establecido un grupo de trabajo en el que participaban representantes de los trabajadores y los empleadores para analizar las observaciones de la Comisión.

b) Derecho de sindicación y de negociación colectiva

Los sindicatos del sector público no participan normalmente en negociaciones colectivas sobre cuestiones salariales, pero existen indicios de que los representantes sindicales intervienen, junto con los representantes del empleador y del Ministerio correspondientes, en la determinación de los salarios mínimos de cada sector. El Gobierno ha mencionado 10 ejemplos concretos de tales acuerdos sectoriales de negociación colectiva. En un país cuyas principales industrias son de propiedad pública, los trabajadores son mayoría en las juntas directivas de las empresas y siempre incluyen en éstas a representantes sindicales. También supervisan la aplicación de la legislación laboral y se encargan de imponer su cumplimiento. En el sector privado, los sindicatos desempeñan un papel activo en la supervisión del cumplimiento de las leyes y en la promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. La ley autoriza a los sindicatos a negociar la celebración de contratos colectivos con los empleadores, pero no se dispone de información acerca de si tales contratos contemplan la posibilidad de que los sindicatos entablen procesos judiciales y estén representados en los tribunales.

c) Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

No existe ninguna ley en Siria que prohíba el trabajo forzoso u obligatorio. Puede imponerse como castigo en algunos casos, en general en relación con delitos sancionados con penas privativas de libertad. El artículo 35 de la Constitución dispone que todo ciudadano tiene el derecho y el deber de trabajar; se considera que dimitir de un cargo público sin el permiso del Ministro correspondiente constituye un delito.

d) Contratación de niños: edad mínima

La edad mínima para trabajar es de 14 años en el sector público, preponderante en la economía siria; sin embargo, se ha establecido un límite más elevado para determinadas industrias. Aunque la edad mínima para trabajar varía más en el sector privado, no se puede emplear a ningún niño de menos de 12 años y se necesita el permiso paterno para contratar a un menor de 16 años. La ley prohíbe el empleo de niños para trabajos nocturnos. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el encargado de velar por que se respeten las disposiciones sobre edad mínima, pero dispone de pocos inspectores de trabajo y es posible que el incumplimiento de dichas disposiciones esté muy generalizado.

e) Condiciones aceptables de trabajo

El Gobierno establece unos salarios mínimo y máximo para el sector público. Los sueldos se determinan por escalas mensuales. En 1989 el Presidente promulgó un decreto en virtud del cual se incrementaban en un 25% los sueldos del sector público, al tiempo que se autorizaba un incremento de hasta el 50% en el precio de la gasolina y de otros productos. Dos meses después, al término de unas conversaciones entre sindicatos y empleadores, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales anunció que los sueldos del sector privado se incrementarían también en un 25%. Según la escala establecida, una persona sin experiencia ni credenciales recién contratada para un puesto que no requiera trabajo físico percibiría un sueldo mensual mínimo de aproximadamente 118 dólares al tipo de cambio oficial.

Una persona con título de doctor percibiría, en su primer empleo en el sector público, un sueldo mensual máximo de 235 dólares aproximadamente. Ninguno de estos dos salarios basta por sí solo para garantizar un nivel de vida digno. En consecuencia, muchos trabajadores se ven abocados al pluriempleo o a depender del apoyo de miembros más o menos cercanos de sus familias.

No existe un salario mínimo fijo para los empleados permanentes del sector privado. Sin embargo, parece que, en la práctica, el mínimo mensual no es inferior al del sector público. De acuerdo con el código de trabajo de 1959, los salarios mínimos se determinan por sectores y son fijados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a partir de las recomendaciones formuladas por una comisión compuesta por un representante del Ministerio de Industria o del Ministerio de Economía y Comercio, un representante de la asociación de empleadores y un representante del sindicato de trabajadores.

Prácticamente todos los aspectos de las condiciones de trabajo están regulados en el derecho laboral sirio. Esta regulación incluye, entre otras cosas, normas y reglamentos que limitan considerablemente la facultad del empleador para despedir a un trabajador sin causa justificada; en caso de despido, el trabajador puede recurrir a un comité de trabajo compuesto por un representante del municipio, un juez, y representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del sindicato y del empleador. En la mayoría de los casos, estos comités de trabajo han fallado en favor del empleado. Una vez contratado, resulta muy difícil despedir a un trabajador. Una de las pocas excepciones de este entorno laboral regulado en casi todos sus aspectos es la de los trabajadores contratados por día: no están cubiertos por la normativa sobre salarios mínimos y sólo perciben indemnizaciones en caso de accidente laboral. Las pequeñas empresas del sector privado los contratan con frecuencia para evitar el costo que suponen los trabajadores con contratos permanentes, que gozan de una gran protección, incluso contra el despido.

La semana laboral es de seis jornadas de seis horas de trabajo, aunque en determinados sectores en los que los trabajadores no están ocupados de forma continuada a lo largo del día se permiten jornadas de nueve horas. En la legislación laboral se establece asimismo la obligación de conceder un día completo de descanso por semana. Todos los trabajadores tienen derecho a 15 días de vacaciones anuales pagadas durante los cinco primeros años de trabajo; los trabajadores que tengan más de 50 años de edad o que lleven trabajando 20 años tienen derecho a 30 días de vacaciones por año. El empleador tiene la obligación de proporcionar asistencia médica en las circunstancias previstas por la ley. Los centros de trabajo que empleen a más de 100 personas deben contratar a una enfermera y facilitar a sus trabajadores acceso a un médico en caso necesario.

La legislación pública contiene normas de seguridad aplicables a todos los sectores, aunque su cumplimiento en la práctica depende de los directivos y, por tanto, puede variar de un centro de trabajo a otro. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene una pequeña Oficina de Salud y Seguridad que intenta inspeccionar y corregir las prácticas que atentan contra la salud o la seguridad en los centros de trabajo. Además, los trabajadores pueden denunciar al empleador si consideran que las condiciones en que desempeñan su trabajo constituyen una amenaza



para su salud. El Gobierno proporciona un seguro de invalidez en caso de accidente laboral. En teoría, los trabajadores extranjeros perciben las mismas prestaciones, pero a menudo son reacios a presentar denuncias porque el permiso de trabajo puede serles retirado en cualquier momento. Por otra parte, muchos de ellos trabajan en Siria ilegalmente y no están cubiertos por el sistema gubernamental.

No se dispone de información sobre las prácticas laborales existentes en las zonas de Siria en las que prevalece el sistema de libre cambio.

-----